

que no tiene un asidero en los modos de pensar y planear la política en nuestro país. Así, la corrupción y las formas de trasgresión asociadas a esta no son precisamente «disciplinas» de acción: son recurrentes, pero no estables; son prácticas rituales, pero no completamente estandarizadas; son técnicas cotidianas, pero varían en la puesta en escena; son utilizadas diariamente, pero no son abiertamente practicadas ni formales.

Esto lleva a indicar que hay modos de poner en escena el poder y la política que se ubican en un punto medio entre los polos de la hiperformalidad y el caos radical. La corrupción es uno de estos modos, lo que hace mucho más complejo su estudio y difícil su combate: se trata de una relación compleja y performativa. Esto permite entrever que los modos en que se ha estudiado este fenómeno tienden a dejar de lado el carácter eminentemente activo de su propia disposición social. Por ejemplo, en este panorama, el modelo del «principal agente» pierde fuerza (pues es difícil determinar con claridad la posición de los actores, que intercambian escenarios constantemente). La corrupción es entonces, como hemos dicho, una forma *institucionalizada en la acción*; no se trata de una actividad casual, no constituye una reacción inconsciente, sino más bien una técnica comúnmente utilizada. Implica cierto orden, regularidad y recurrencia, pero no está pre-determinada, se pone en acción estratégicamente.

5. La corrupción muestra uno de los rostros más cotidianos del poder y de la autoridad. Ahí donde parece negarse, la política expresa con la corrupción su forma más silenciosa, aquello que pretende ocultar. Las autoridades

subversivas se muestran, en este ámbito, reinventando el funcionamiento y el orden de las instituciones desde adentro. Esto nos obliga a entender que las trasgresiones periódicas del orden establecido son parte del propio orden social y «muchas veces funcionan como condiciones para su propia estabilidad». Esto sugiere que —como ha indicado Vich refiriéndose a Zizek—, «lo que mantiene unido a un grupo social, es decir, lo que le proporciona la cohesión necesaria para su existencia, no es tanto la identificación con la ley, sino, más bien, la identificación con formas específicas de transgresión y de evasión de esas normas».¹

En la vida cotidiana y en los grandes poderes del Estado, la corrupción genera y fecunda constantemente nuevas alianzas, nuevas complicidades, nuevos modos de jugar con las reglas replanteándolas a través de las trasgresiones constantes. Las autoridades son subversivas y los ciudadanos trasgresores, pero contra lo que podría parecer a simple vista, estas prácticas y estos actores no destruyen simplemente el entramado político y social, sino que lo dotan de una estructura performativa, móvil, que atraviesa todos los campos. Ahora, si bien no se trata de decir que la corrupción es una práctica liberadora y mucho menos deseable, es importante comprender que este modo de plantear la política y las relaciones sociales, la corrupción en todas sus formas, parece imponer las reglas de un juego que todos hemos aprendido a jugar y que ponemos en práctica todos los días. ■

¹ Vich, Victor. *El discurso de la calle*. Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales, 2001. p. 177.

LECCIONES ECONÓMICAS DE LOS CASOS DE ARGENTINA Y SUECIA

Jan-David Gelles Caner

Profesor del Departamento de Economía PUCP

Los casos de Argentina y Suecia son, por distintas razones, problemáticos para pensadores de orientación neoliberal como Mario Vargas Llosa y Mauricio Rojas, historiador económico chileno radicado en Suecia. Vargas Llosa recientemente ha escrito un artículo de opinión titulado «Hacerse el sueco»¹; entiéndase por «hacerse el sueco», hacerse el desentendido, fingir no ver o enterarse de algo, para evitarse una incomodidad.

Poca duda cabe acerca de que el neoliberalismo ha traído consecuencias económicas y sociales negativas —la palabra ha cobrado, con justicia, un sentido peyorativo—, pero aquí el problema es para los ideólogos de esta tendencia.²

¹ El artículo fue publicado en la edición digital de *El País* el 7 de agosto de 2005 <www.elpais.es>.

² Véanse las críticas de Joseph Stiglitz al neoliberalismo en el artículo de opinión titulado «El consenso después del consenso», publicado

Las intenciones de ambos pensadores parecerían, primero, desvincularse del fracaso de las reformas neoliberales implementadas en Argentina durante el período 1976-2001/2002; y segundo, desprestigiar alternativas existentes, como el «modelo sueco».

En el caso del país sudamericano, existiría, según ellos, una confusión semántica generada por el uso del término *neoliberal* para referirse a las políticas de «gobernantes mafiosos»; mientras que en el caso del país nórdico, habría un resquebrajamiento del estado de bienestar sueco, ejemplificado por la privatización —parcial— de las pensiones de jubilación y otras reformas favorables al mercado.

Argentina

Para darse cuenta de la magnitud del deterioro de la posición relativa de la clase trabajadora argentina, se puede destacar que la participación de los asalariados en el producto bruto interno (PBI) de ese país llegó a un nivel de 47,68% en 1955 —año del fin de los primeros gobiernos peronistas—, mientras que le correspondió una cifra de 33,49% en 1999 —el peronista Menem entregó el poder en diciembre de ese año— y es 23,87% en 2004, durante la administración peronista de Néstor Kirchner.³

Hay, pues, una marcada tendencia regresiva por la cada vez menor proporción de la masa salarial en el ingreso de los argentinos; es decir, un incremento del excedente de explotación.

Parafraseando al Roberto Arlt de *Los siete locos*, se podría decir que los peronistas son bolcheviques, católicos, fascistas, ateos, militaristas en diversos grados de iniciación.

Como señalan Mario Rapoport y colaboradores en un libro sobre la historia económica, política y social de la Argentina recientemente publicado —una proeza intelectual de más de 1.100 páginas—, las reformas económicas neoliberales, inicialmente impuestas por la última dictadura militar (1976-1983), recibieron el apoyo de importantes organizaciones empresariales de ese país, como el Consejo Empresario Argentino (CEA), que «agrupaba, de manera selectiva, a los empresarios más importantes de los diferentes sectores de la economía».⁴

En 1976 se inició un cambio del modelo económico prevaleciente en la etapa de industrialización proteccionista —Argentina había abandonado con anterioridad su tradicional liberalismo basado en la agroexportación, como resultado de la crisis mundial de la década de 1930— y se adoptaron políticas tendentes a favorecer «la acumulación rentística y financiera».⁵

Tras la liberalización comercial, hubo un *boom* importador que ocasionó un derrumbe muy pronunciado en los sectores económicos vinculados al mercado interno. Esta situación no puede ser enteramente atribuida a ineficiencias microeconómicas relativas ni tampoco a una composición anómala del PBI industrial por ausencia de una industria compleja en la Argentina.

Esas reformas se profundizaron con las privatizaciones menemistas de las empresas públicas argentinas, mediante las cuales «grandes grupos de capital nacional y las grandes empresas transnacionales» se aseguraron, a precios de liquidación, un conjunto de mercados monopólicos y oligopólicos; y de manera importante, permitieron destinar los ingresos fiscales de esas privatizaciones a cumplir con los pagos de la enorme deuda externa argentina.⁶

Las reformas neoliberales en Argentina fueron implementadas por una serie de gobernantes que actuaron tanto en tiempos de dictadura como de democracia, pero siempre aliados a los grandes empresarios nacionales y extranjeros, así como al *establishment* económico y financiero internacional.

Suecia

En Suecia existe un amplio consenso ciudadano contrario al desmantelamiento de los logros alcanzados a través de las políticas de bienestar impulsadas por el Estado. La prédica neoliberal en ese país se enfrenta con el problema de que hasta los neoliberales suecos son socialistas en diversos grados de iniciación.

El gasto social en Suecia —país con una economía altamente globalizada— ascendió a 28,92% del PBI en el año 2001, cifra superada únicamente por Dinamarca.⁷

El ratio de gasto social sobre PBI alcanzó un valor de 36,77% en el año 1993, máximo de la década de 1990 para Suecia y el resto de países con estados de bienestar avanzados. Pero tuvo que reducirse, en parte, para financiar con dinero público un costoso rescate

en la edición digital de *Página 12* el 21 de agosto de 2005 <www.pagina12web.com.ar>

³ Véase Lindenboim, Javier; Juan M. Graña y Damián Kennedy. *Distribución funcional del ingreso en Argentina: ayer y hoy (documento de trabajo)*. Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo, 2005 <www.econ.uba.ar>

⁴ Rapoport, Mario y colaboradores. *Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2000)*. Buenos Aires: Ediciones Macchi, 2004 (5.ª edición).

⁵ *Ibidem*.

⁶ *Ibidem*.

⁷ Véase *OECD Factbook 2005* <www.oecd.org>.

bancario producto de la especulación financiera de la década de 1980.⁸

Referirse a la privatización —parcial— de las pensiones de jubilación en Suecia no es falso, pero sí algo engañoso, porque el grueso de éstas se financia según un esquema de reparto a una tasa de 16% sobre las remuneraciones del trabajador —aun después de la reforma del año 1998—. Solamente una tasa adicional de 2,5% se invierte en cuentas individuales de capitalización —vale decir que de cada 100 coronas que aporta un trabajador sueco, solamente 14 ingresan en la cuenta individual—.

Paradójicamente, el Estado sueco administra los fondos de pensiones de jubilación más grandes provenientes de esas

cuentas individuales y cobra las comisiones más bajas, en abierta competencia con las administradoras privadas.⁹

Pero quizá lo más importante es que el Estado sueco garantiza una pensión mínima universal e incorpora la política social como parte del sistema de pensiones, dado que las cajas que pagan seguro de desempleo y seguro de enfermedad tienen la obligación de contribuir al sistema de pensiones. ■

⁸ Véase Karl-Henrik Petterson. *Bankkrisen inifrån*. Stockholm: SNS Förlag, 1993.

⁹ Véase John Turner. «Individual Accounts: Lessons from Sweden». *International Social Security Review*, vol. 57, 1/2004.

UNA ANTROPOLOGÍA ANTE EL PERÚ DE HOY

Cecilia Rivera

Profesora del Departamento de Ciencias Sociales PUCP

Son cuatro los congresos nacionales de investigaciones en Antropología que se han realizado en el Perú. El primero se celebró en 1985 por iniciativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, entonces una recientemente creada dependencia del Estado. Esta institución buscaba difundir en el país los avances del conocimiento en diferentes disciplinas científicas —más bien enclaustradas en Lima—, así como crear espacios y redes de comunicación con las provincias. Antes del uso regular de Internet como medio de comunicación científica y en momentos en que la violencia política interna estaba en pleno crecimiento, este primer congreso se realizó en el Centro Cívico de Lima, todavía como parte de un intenso y crítico movimiento intelectual. Es decir, a contracorriente de la reducción de los espacios comunicativos y de las insuficientes condiciones de seguridad para el trabajo de investigación en el campo y la transmisión de preguntas y resultados.

Pasaron 12 años para que se realizara el segundo congreso. Después de cierto letargo en el movimiento intelectual y la investigación social y antropológica —inducido por la censura, la polarización y el miedo que promovieron las fuerzas políticas armadas en conflicto durante la década de 1980 y la primera mitad de la de 1990—, un grupo de antropólogos de la Universidad

Nacional San Cristóbal de Huamanga logró enfrentar el aislamiento y superar la fragmentación de la disciplina convocando al segundo congreso nacional. Este se realizó en 1997 en la ciudad de Huamanga y marcó la vuelta de los antropólogos a la investigación de campo en las zonas rurales andinas. Desde entonces han sido las universidades y sus secciones o escuelas de Antropología las que se han encontrado en condiciones de turnarse la posta para convocar a los investigadores. Haciendo un recorrido por el país, el tercer congreso se realizó en Arequipa en 2001 y el quinto nos llevará al Cuzco.

El cuarto congreso se desarrolló nuevamente en Lima, entre el 1.º y el 6 de agosto, al cabo de veinte años de la realización del primero. Esta vez, el encuentro rompió las barreras prácticas y simbólicas que distancian a los dos programas de formación de antropólogos más importantes del país. Las áreas de Antropología de dos universidades, una pública y otra privada, adecuaron sus diferentes lógicas de funcionamiento y aunaron esfuerzos para organizar conjuntamente un evento que llevó por nombre La Antropología Ante el Perú de Hoy. En las sedes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), 750 personas inscritas pudieron asistir a